

Reporte confidencial del pentágono

(Frank Duran Rosillo, Siempre, Págs. 48-50)

El Gobierno de López Obrador no solamente ha mostrado rechazo a la presencia de 54 agentes federales de la agencia antidrogas, DEA en territorio mexicano, sino que ahora se confirma que ordenado “aminorar o si es posible cancelar” toda acción de cooperación para la investigación y detención de peligrosos criminales entre México y Estados Unidos, lo cual rompe los acuerdos de la Iniciativa Mérida.

En administraciones anteriores era notorio el trabajo coordinado de fuerzas policiales entre las dos naciones, actualmente se podría decir que la Iniciativa Mérida de apoyo a las fuerzas del orden mexicanas que combaten la violencia, tráfico y lavado de dinero de los carteles mexicanos ha sido cancelada, y con la liberación de Ovidio Guzmán a Washington le queda muy claro que su socio comercial y vecino, es cómplice de criminales.

Fred Mays, director de Asuntos Internos del Buro de Investigaciones de Georgia GBI, en múltiples ocasiones mostró a este corresponsal, admirado, las fotos que la Policía Federal y el Ejército Mexicano les mandaban al FBI y todos los cuerpos policiales de Estados Unidos, para analizar identidades de cadáveres y escena del crimen en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sobre las masacres del narco, ahora en el presente gobierno ya no reciben nada. Fred Mays, con bastante experiencia en la investigación de drogas en el Estado de Georgia, explica que las fotos eran procesadas en un sistema computarizado de recolección de evidencia que tienen tanto a nivel federal como estatal, donde se escanea en detalle, la identidad de los cadáveres, trayectoria de las balas, y los proyectiles disparados, con el “rayado” eran comparados con las bases de datos para saber no solo la procedencia del arma, sino saber si esta pudo haber sido utilizada en territorio norteamericano en el pasado.

El jefe policiaco que recientemente se acaba de retirar tras 37 años de servicio, explica que uno de los principales objetivos del plan “Rápido y Furioso” de la agencia federal ATF, “Alcohol, Tobacco and Firearms” era precisamente procesar las imágenes de los proyectiles disparados para hacer el rastreo de los carteles.

DEA PAGA INFORMANTES EN MÉXICO Otros entrevistados opinan que desde que Andrés Manuel López Obrador entro a la presidencia de México, la cooperación en materia de justicia con EU es mínima, la inteligencia que manda el Ejército Mexicano a EU, la reciben manipulada, a grado tal que los 54 agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) y los de la Agencia Central de Inteligencia, — ambas corporaciones cuyos miembros han sido amenazadas de muerte por los carteles mexicanos—, se han visto en la necesidad de pagar servicios de “informantes” entre las redes criminales de la droga que son quienes les dan fotos ubicaciones y datos por \$300 dólares en efectivo, o más si se trata de algo que lleve a la captura de algún líder de un prominente cartel.

Periódicamente los grupos policiales a nivel federal, estatal y local de EU se reunían periódicamente para analizar la información entregada por México; había programas de intercambio en el que policías iban a ciudades mexicanas a aprender

español y las costumbres; hasta los militares norteamericanos tenían intercambio con las zonas militares de México, mientras que oficiales del Ejército Mexicano se entrenaban en la Escuela de las Américas en Columbus, Georgia, actividades canceladas de manera inmediata y determinante, por el actual presidente mexicano.

----ooo0ooo---

A México es tiempo de salvarlo

(Mireille Roccatti, Siempre, Págs. 22-23)

Principio de la teoría del movimiento y la causalidad. Las recientes elecciones nos muestran descarnadamente varias de las espinosas aristas de la política pública en materia de seguridad y la vorágine de violencia en que se encuentra inmerso nuestro país, con una parte de nuestro territorio controlado por la delincuencia organizada.

En lugar de felicitar a los criminales porque “se portaron bien” el día de la jornada electoral, el Ejecutivo se debería replantear con seriedad la estrategia, se requiere modificar las acciones, deben persistir las destinadas a golpear la logística operativa de los cárteles, pero simultáneamente se deben fortalecer las tareas encaminadas a incautarles el dinero que blanquean en los sistemas financieros, a detener el flujo de armamento proveniente de los EU, desmontar las redes de narcomenudeo y exterminar la red de protección que les proporcionan no sólo policías, sino también políticos, empresarios y comerciantes, prestanombres y finalmente utilizar con mayor rigor el Sistema de Inteligencia.

El uso de la inteligencia civil y militar debe privilegiarse frente al enfrentamiento a balazos. La violencia no se combate con violencia. Un punto especial complementario en el que hay que poner el acento es en una verdadera política de desarrollo humano. La verdad es que no estamos en una guerra en el término convencional del concepto; entendemos que denominarlo así resulta un ejercicio metafórico y discursivo.

Al Estado le corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. Quienes así lo exigimos y hemos venido pidiendo modificar la estrategia y aportando propuestas, no somos los enemigos a vencer. Ningún ciudadano de bien estaría de acuerdo, en rendirse ante la delincuencia organizada y menos pactar con ella. El Estado no debe pactar con trasgresores de la ley.

Por otra parte, duele la patética actitud del Ejecutivo federal, que insiste en su diagnóstico justificatorio para defender su errática estrategia de seguridad, cuya espiral de violencia ya había costado a finales del 2020 más de 40,000 muertes violentas, y es evidente la percepción ciudadana de que el Gobierno no está actuando en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada.

Y ahora no se le ocurrió nada mejor que proponer una reforma legislativa para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo que originalmente cuando se planteó su creación se justificó la necesidad de crear un órgano policial que dependiera de un mando civil. Es dentro de este contexto que, quizá se haya realizado la visita a nuestro país de Kamala Harris, del Director y del subdirector y de la CIA de Estados Unidos, no solamente a tratar los temas de migración y salud, pero también preocupa a nuestros vecinos la amenaza de tener una frontera de 3,000 kilómetros con un país cooptado por el Narco.

----ooo0ooo---

AMLO en manos de los cárteles

(Beatriz Pagés, Siempre, Págs. 6-7)

López Obrador tendrá que decidir de qué lado está. Si le interesa y conviene más ser aliado del crimen organizado o si colabora con Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. La paciencia de Washington parece agotarse.

El gobierno mexicano ha dejado de ser visto como una víctima incapaz de enfrentar a las bandas criminales a ser percibido como un promotor consciente de la delincuencia organizada.

Los resultados electorales del pasado 6 de junio son la prueba que necesitaban las agencias de seguridad norteamericana para confirmar que la 4T busca apuntalar su poder con el dinero y las armas del crimen trasnacional.

Morena con ayuda del “voto narco” va a gobernar los puertos del Pacífico que utiliza el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación para importar la droga que luego trafican a Estados Unidos, lo que entra en conflicto con la exigencia de Kamala Harris a López Obrador de frenar el tráfico de fentanilo que viene de China. Al presidente de México se le ve atrapado cada vez más entre dos intereses opuestos.

Entre la presión de la Casa Blanca para combatir a los carteles responsables de la muerte de 83 mil estadounidenses por sobredosis al año y el pacto firmado con los criminales para extender su poder electoral en 11 gubernaturas. ¿Qué va a suceder cuándo Estados Unidos se da cuenta que el gobierno mexicano sigue estando más interesado en proteger que en exterminar a sus amigos de Sinaloa? ¿Y qué podría ocurrir si AMLO se ve obligado a traicionar a los cárteles?

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó a Morena de ser un “narcopartido” y exigió la anulación de las elecciones en su estado porque Alfredo Ramírez Bedolla ganó la gubernatura de la mano del crimen. Si los mandatarios de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, hicieran lo mismo salvarían a México de convertirse en un Estado criminal. El silencio de AMLO ante la evidente intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral confirma de qué lado está el presidente. Por eso dedica una y otra “mañanera” a inventar distractores. Recurre a la farsa de la consulta para enjuiciar a cinco expresidentes o al “quien es quien en las mentiras de los medios” para desviar la atención sobre un tema que está por poner a la nación en la picota de un juicio internacional.